

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	GLORIA LUCIA CAÑAS DE RAMÍREZ
DEMANDADO	HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE GERARDO DE JESÚS METAUTE JARAMILLO Y ANA SOFIA GONZÁLEZ DE CAÑAS
INSTANCIA	SEGUNDA –APELACIÓN AUTO-
PROCEDENCIA	JUZGADO VEINTIUNO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 03 013 2011 00511 01 INTERNO 2023-0019
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N° 047
TEMAS	DESISTIMIENTO TÁCITO-CUMPLIMIENTO CARGA DE LAS PARTES
DECISIÓN	CONFIRMA
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, frente al auto de fecha 12 de septiembre de 2022, proferido por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medellín, providencia mediante la cual se terminó por desistimiento tácito el proceso ordinario con pretensión de declaratoria de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio instaurado por la señora Gloria Lucia Cañas de Ramírez en contra de los herederos determinados e indeterminados de Gerardo de Jesús Metaute Jaramillo y Ana Sofía González de Cañas; siendo llamada como heredera determinada de Gerardo de Jesús Metaute Jaramillo su cónyuge Amanda de Jesús Cañas González y, los herederos determinados de Ana Sofía González de Cañas, esto es, sus hijos mayores de edad Guillermo Alberto Cañas González, Amanda de Jesús Cañas González, Ana Sofía Cañas González, María Rosmira Cañas González, Luz Amparo Cañas González, Pedro José Cañas González, Carlos Emilio Cañas González, Alirio de Jesús Cañas González y María Fabiola Cañas González –fallecida-, quien a su vez dejó los siguientes hijos mayores de edad quienes son demandados en este proceso, Leonardo Fabio López Cañas, Clara Inés Cañas, Carlos Mauricio López Cañas,

Ramiro Hernando Cañas y Jesús María Cañas González –fallecido-, quien dejó los siguientes hijos mayores de edad quienes son demandados en este proceso, Martha Elena Cañas Vanegas, María Eugenia Cañas Vanegas Margarita María Cañas Vanegas, Dora María Cañas Vanegas, Luz Stella Cañas Vanegas, Alba Nubia Cañas Vanegas, Natali Cañas Medina, Víctor Alfonso Cañas Medina y Diego Luís Cañas Medina e igualmente contra las personas indeterminadas que se crean con derecho sobre el bien a usucapir.

I. ANTECEDENTES

La señora Gloria Lucia Cañas de Ramírez mediante apoderado judicial, formuló demanda con pretensión de declaración de pertenencia por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, contra los herederos determinados e indeterminados de Gerardo de Jesús Metaute Jaramillo y Ana Sofia González de Cañas pretendiendo que se declare que la actora ha adquirido por prescripción extraordinaria de dominio el siguiente bien inmueble:

Solar ubicado en Medellín, determinado con el número 4 de la manzana 5 de la urbanización Florencia II, debidamente determinada en el plano protocolizado con la escritura pública N°1316 del 17 de abril de 1964 de la Notaría Segunda del Circuito de Medellín, con una cabida de ciento cuarenta metros cuadrados (140mts²) y cuyos linderos generales son: por el frente, con carrera 75; por el fondo con el lote N°6; por un costado con el lote N°3; por el otro costado con el lote 5. Este inmueble identificado aparece en la escritura pública N°4482 de 1 de octubre de 1972 de la Notaría Cuarta de Medellín, donde el señor Gerardo de Jesús Metaute Jaramillo y otra, adquiere el derecho real de dominio y la escritura pública N°3531 de 27 de junio de 1991 de la Notaría Doce de Medellín, donde la señora Ana Sofía González de Cañas, adquirió el 50% en proindiviso del inmueble objeto de la demanda. Actualmente la nomenclatura del inmueble es, Medellín carrera 75 N°114-11. Sobre el inmueble se levanta una propiedad de material y el techo en tablilla y teja una parte y en el fondo del inmueble hay una terraza o losa de cemento, con escalas de acceso a la terraza, dicha terraza tiene una extensión aproximada de 8.16 metros de largo por 6.78 metro de ancho.

La demanda fue admitida en providencia del 25 de julio de 2011 por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín (página 45 archivo 01. Primera Instancia); mediante proveído del 12 de septiembre de 2012 (Página 99, archivo 01. Primera Instancia), se notificó por conducta concluyente a la señora Amanda de Jesús Cañas González, posteriormente, en aras de continuar con el proceso, el Juzgado Trece Civil de Circuito de Medellín en auto del 7 de febrero de 2013 (Página 104, archivo 01. Primera Instancia), requiere a la parte actora para que en el término de treinta (30) días realice las gestiones pertinentes para impulsar el proceso, en el sentido de procurar la publicación de los edictos emplazatorios, ante el requerimiento la parte actora cumple con la carga procesal; no obstante, nuevamente el juzgado mediante providencia de 4 de junio de 2013 (Página 120, archivo 01. Primera Instancia), requiere a la parte actora para que dentro del término de treinta (30) días lleve a cabo la notificación de las personas que se creyeran con derechos sobre el bien a usucapir y de los herederos indeterminados de Gerardo de Jesús Metaute Jaramillo y Ana Sofía González de Cañas.

El día 19 de septiembre de 2013 el señor Guillermo Alberto Cañas González se notificó personalmente, asimismo el 01 de noviembre de 2013 los señores Leonardo Fabio López Cañas, Carlos Mauricio López Cañas y Ramiro Hernando Cañas. (Páginas 125, 126 y 127, archivo 01. Primera Instancia), más adelante, el 30 de octubre de 2014 se notificó la señora Luz Amparo Cañas González (Página 161, archivo 01. Primera Instancia).

Mediante memorial radicado el 03 de marzo de 2015 el apoderado de la parte demandante informa y anexa los registros de defunción de Alirio de Jesús Cañas González y María Eugenia Cañas Vanegas (Páginas 175-179, archivo 01. Primera Instancia), en el mismo escrito solicita al juez, si lo considera pertinente, se vinculen a los herederos determinados e indeterminados de los causantes.

El Juzgado Quince Civil del Circuito de Medellín, quien asumió el conocimiento posterior del proceso, mediante providencia del 17 de junio de 2015 (Página 180, archivo 01. Primera Instancia), ordena a la parte demandante efectuar en debida forma la petición de vinculación e indicar los nombres de los herederos de los causantes y en caso de no conocerlos, proceder como corresponde respecto a

herederos indeterminados; igualmente, requiere a la parte demandante para que gestione la notificación a los demandados que aun no se han notificado de la demanda.

En cumplimiento del auto mencionado, el apoderado de la parte demandante mediante memorial radicado el 05 de noviembre de 2015 informa que los herederos del causante Alirio de Jesús Cañas González son sus hijos, Jorge Alirio Cañas Molina, Ana Lucia Cañas Molina, Beatriz Elena Cañas Molina, Mónica María Cañas Molina, Isabel Cristina Cañas Molina, Juan Carlos Cañas Molina y Wbeimar Alberto Cañas Molina fallecido, soltero y sin hijos, con respecto a la causante María Eugenia Cañas Vanegas informa que, era soltera y tenía cuatro hijos mayores de edad, Alex, Diana, Johana y Catalina, de quienes se desconoce los apellidos (Páginas 182 y 183, archivo 01. Primera Instancia).

El Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medellín mediante providencia de 07 de julio de 2016 (Páginas 184-187, archivo 01. Primera Instancia), en primer lugar, reconoce a Jorge Alirio, Ana Lucia, Beatriz Elena, Mónica María, Isabel Cristina y Juan Carlos Cañas Molina como herederos de Alirio de Jesús Cañas González en calidad de sucesores procesales y requiere al abogado de la parte demandante para que allegue las direcciones de los citados y para que indague sobre los apellidos de los herederos determinados de la señora María Eugenia Cañas Vanegas a quienes no les reconoce calidad de sucesores procesales en tanto no se alleguen sus nombres completos; en segundo lugar, ordena el emplazamiento de los herederos indeterminados de los señores Jesús María Cañas González, María Fabiola Cañas González, Alirio de Jesús Cañas González y María Eugenia Cañas Vanegas, y en tercer lugar, requiere a los demandados Guillermo Alberto Cañas González y Amanda de Jesús Cañas González para que aporten la prueba de la calidad de herederos de Ana Sofía González de Cañas.

El 25 de agosto de 2016 el abogado de la parte demandante manifiesta que desconoce los apellidos y direcciones para notificaciones de los hijos de la señora María Eugenia Cañas Vanegas, por lo cual solicita al juzgado su emplazamiento y que el mismo se realice en conjunto con el emplazamiento

ordenado para los herederos indeterminados de los señores Jesús María Cañas González, María Fabiola Cañas González, Alirio de Jesús Cañas González y María Eugenia Cañas Vanegas (Páginas 188 y 189, archivo 01. Primera Instancia); frente a este escrito, el juzgado mediante providencia de 19 de septiembre de 2016 (Página 190, archivo 01. Primera Instancia), requiere a la parte demandante para que en el término de treinta (30) días cumpla con la carga procesal impuesta, esto es, el emplazamiento a los herederos indeterminados de los señores Jesús María Cañas González, María Fabiola Cañas González, Alirio de Jesús Cañas González y María Eugenia Cañas Vanegas, so pena de terminar el proceso por desistimiento tácito; carga procesal que fue cumplida en debida forma el 26 de octubre de 2016 (Páginas 192-196, archivo 01. Primera Instancia).

Mas adelante, en el transcurso del proceso, el apoderado de la parte demandante informa al juzgado que la señora Amanda de Jesús Cañas González falleció y anexa el registro civil de defunción (Páginas 230-233, archivo 01. Primera Instancia), frente a lo cual, el juzgado se pronuncia mediante auto de 06 de agosto de 2019 (Página 234, archivo 01. Primera Instancia), requiriendo a la parte demandante para que en el término de treinta (30) días, so pena de desistimiento tácito, indique cuáles son las personas llamadas a comparecer al proceso, en representación de la señora Amanda de Jesús Cañas González; el abogado de la parte demandante en memorial radicado el 24 de septiembre, informa que, las personas llamadas a comparecer en representación de la aludida señora son los ya demandados en el proceso en calidad de hermanos (Páginas 236-237, archivo 01. Primera Instancia).

Después de varios escritos presentados por el apoderado de la parte demandante, el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medellín en providencia del 8 de julio de 2022, verificando lo actuado dentro del proceso, encuentra que aún falta por integrar a la Litis las siguientes personas:

“Como herederos determinados de Ana Sofía González de Cañas, Ana Sofía Cañas González, María Rosmira Cañas González, Pedro José Cañas González, Carlos Emilio Cañas González, y los fallecidos: a) Alirio de Jesús Cañas González, de quien se denunció como herederos determinados a Jorge Alirio Cañas Molina, Ana Lucía Cañas Molina, Beatriz Elena Cañas Molina, Mónica María Cañas Molina, Isabel Cristina Cañas Molina, Juan Carlos Cañas Molina y Weimar Alberto Cañas

Molina, este último fallecido; b) María Fabiola Cañas González, de quien falta por notificar a la heredera determinada Clara Inés Cañas; c) Jesús María Cañas González, de quien se informó que sus herederos determinados eran Martha Elena Cañas Vanegas, Margarita María Cañas Vanegas, Dora María Cañas Vanegas, Luz Stella Cañas Vanegas, Alba Nubia Cañas Vanegas, Natalí Cañas Medina, Víctor Alfonso Cañas Medina y Diego Luis Cañas Medina.”

Y en vista de que el proceso no puede continuar si no se integran debidamente al mismo todos los que conforman la parte pasiva, el juzgado requiere a la parte demandante para que en el término de treinta (30) días siguientes a la notificación de ese auto, so pena de terminar el proceso por desistimiento tácito, gestione de manera efectiva notificando a los antes citados, con excepción de Wbeimar Alberto Cañas Molina, frente a quien dispone emplazamiento de sus herederos indeterminados. En la misma providencia, el juzgado resuelve las solicitudes impetradas por el apoderado de la parte demandante, primero, para vincular a los herederos de Alirio de Jesús Cañas González, frente a la cual, le recuerda que ya fue resuelta en auto de 07 de julio de 2016; segundo, en relación con la solicitud de vincular al cónyuge de la fallecida Ana Sofía González de Cañas, requiere al petente para que señale de manera clara el nombre, la identificación y la prueba sobre la cual recae el deber de vincular; y tercero, con respecto a la solicitud de relevo de la curadora ad-litem de los herederos indeterminados, designa una terna de abogados, ordenándole a la parte actora su notificación, lo cual también ordena cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de ese auto (Archivo 04, Primera Instancia).

El 17 de agosto de 2022 mediante correo electrónico se adjunta edicto publicado el domingo 14 de agosto de 2022 en el periódico el espectador, como en emisora (Archivos 07, 08, 09 y 10, Primero Instancia); actuación que el juzgado a través de la providencia con fecha 22 de agosto de 2022 no admitió y dispone que dicha publicación se realice nuevamente y en debida forma (Archivo 11, Primera Instancia).

El 16 de agosto de 2022 la doctora Martha Isabel Pérez Villa a través de correo electrónico dirigido al juzgado, acepta el nombramiento en calidad de curadora ad-litem (Archivos 12 y 13, Primera Instancia).

El 24 de agosto de 2022 el apoderado de la parte demandante aportó constancia de envío de notificación así: (i) frente a Jorge Alirio, Ana Lucia, Beatriz Elena, Mónica María, Isabel Cristina, Martha Elena y Juan Carlos Cañas Molina fueron devueltas por la empresa 472, porque no existen esas nomenclaturas, solicitando se ordene el emplazamiento de los mismos; (ii) respecto de Margarita María Cañas, Dora María, Alba Nubia y Luz Stella Cañas Vanegas fueron devueltas por la empresa 472 después de dos intentos de entregar la notificación en sus domicilios, por lo cual solicita su emplazamiento; (iii) anexa copia del edicto emplazatorio del señor Wbeimar Alberto Cañas Molina, publicación realizada en el periódico el Espectador el 14 de agosto de 2022; (iv) frente a Clara Inés Cañas, Natali Cañas Medina, Víctor Alfonso Cañas medina y Diego Luis Cañas Medina dice que recibieron la citación para notificación; (v) finalmente, respecto a los curadores ad-litem anexó constancia de envío de comunicación a Martha Isabel Pérez Villa, Carlos Mario Espinosa Cuadros y Laura Cristina Parra Rojo, frente a esta última, la comunicación fue devuelta, situación ante lo cual decidió llamarla a su número de celular, e informa que la misma le dijo que enviaría un correo al juzgado para aceptar su nombramiento (Archivos 14 y 15, Primera Instancia).

Luego de advertir que no se había cumplido cabalmente con el requerimiento del 8 de julio de 2022, decidió el *a quo* terminar el proceso por desistimiento tácito, al encontrar que: (i) frente a Juan Carlos, Isabel Cristina, Mónica María, Beatriz Elena, Jorge Alirio y Ana lucia, la dirección a la que se envió la notificación no corresponde a la aportada dentro del proceso; (ii) en similar sentido respecto a Martha Elena Cañas Vanegas la dirección a la que se envió la notificación no coincide con la informada en la demanda; (iii) las guías correspondientes a Laura Cristina Parra Rojo, Dora María Cañas Vanegas, Martha Isabel Pérez Villa y Carlos Mario Espinosa Cuadros, no se tienen en cuenta porque no son parte; (iv) en cuanto a Ana Sofia Cañas Molina, María Rosmira Cañas Molina, Pedro José Cañas Molina y Carlos Emilio Cañas Molina, nada se allegó para verificar que fueron notificados; (v) la parte demandante anexó copia del emplazamiento a los herederos indeterminados de Wbeimar Alberto Cañas Molina realizado el 14 de agosto de 2022, el cual ya había sido

rechazado por el juzgado, habiéndose ordenado nuevamente la publicación en debida forma, la que no se probó haberse efectuado (Archivo 19. Primera Instancia).

II. LA IMPUGNACIÓN.

En desacuerdo con tal decisión, formuló el apoderado judicial de la señora Gloria Lucia Cañas de Ramírez recursos de reposición y en subsidio apelación, argumentando que se tenga en cuenta todo el esfuerzo realizado para notificar a las personas mencionadas en la actuación; manifiesta que las citaciones realizadas a través de la empresa de correo 472 cumplen con los requisitos del artículo 316 del C. de P.C., notificaciones que se encuentran cotejadas y selladas por el respectivo correo 472, con sus guías y certificación o constancia sobre el resultado de cada una; sobre los errores en la nomenclatura de Juan Carlos, Isabel Cristina, Mónica María, Beatriz Elena, Ana Lucía y Jorge Alirio Cañas Molina, informa que la dirección a las que se enviaron las notificaciones es la que corresponde a sus domicilios, y que frente a Martha Elena Cañas Vanegas no coincide su dirección debido a un error humano del apoderado; respecto a las notificaciones de Laura Cristina Parra Rojo, María Isabel Villa y Carlos Mario Espinosa Cuadros, fueron designados por el despacho como curadores Ad-Litem, de los cuales uno ya se notificó y aceptó el cargo; referente a Ana Sofía Cañas González, María Rosmira Cañas González, Pedro José Cañas González y Carlos Emilio Cañas González, ya se notificaron en el Despacho; finalmente, frente a la orden de realizar nuevamente el emplazamiento a los herederos indeterminados de Wbeimar Alberto Cañas Molina, dijo que se realizó el 28 de agosto de 2022, enviando constancia de ello al despacho el 6 de septiembre de 2022 (Archivos 24, 25, 26 y 27. Primera Instancia). Por lo expuesto solicita reponer el auto de fecha 12 de septiembre de 2022 y se ordene continuar con la actuación procesal, de no aceptar las argumentaciones, pide se conceda el recurso de apelación (Archivo 21. Primera Instancia).

Concedido el respectivo traslado secretarial (Archivo 22. Primera Instancia), ningún pronunciamiento se obtuvo de la parte no recurrente, procediendo el Despacho a decidir el recurso de reposición mediante auto de 13 de octubre de 2022

(archivo 30. Primera Instancia), providencia en la que aclara que en ningún momento cuestionó el cumplimiento de los requisitos de que trata el artículo 316 del C. de P.C., ya que dicha norma se encuentra derogada; frente a la afirmación de la no coincidencia en las direcciones a donde se remitieron las citaciones para notificar a Jorge Alirio, Ana Lucia, Beatriz Elena, Mónica María, Isabel Cristina y Juan Carlos, dijo que las mismas no resultan de recibo, teniendo en cuenta que en ningún momento aportó por la parte actora, ni solicitó tener una dirección diferente a la que se encuentra en la demanda y frente a Martha Elena Cañas Vanegas, se admite por el recurrente la ocurrencia de un error humano en el número de la carrera, lo que arroja como resultado el no cumplimiento oportuno de la carga; que contrario a lo afirmado por el recurrente, en el expediente no hay constancia de que Ana Sofía Cañas González, María Rosmira Cañas González, Pedro José Cañas González y Carlos Emilio Cañas González se hayan notificado, en cuya virtud mantuvo incólume la decisión de terminar el proceso por desistimiento tácito y concedió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente, en el efecto suspensivo.

El expediente fue repartido en sede de segunda instancia a este Despacho judicial el 1 de febrero de 2023, siendo procedente resolver de plano conforme establece el artículo 326 del C.G.P.

III. CONSIDERACIONES

1. EL DESISTIMIENTO TÁCITO.

Conocido es que el procedimiento civil está orientado por un criterio tendencialmente dispositivo de donde se infiere que corresponde a las partes por regla general, el inicio e impulso de la serie. Así mismo, compete al Juez brindar el impulso pertinente cuando le corresponda.

De manera que las partes tendrán la carga de cumplir con sus obligaciones procesales dentro de los términos que incumba, así como el Juez cuando a él concierna, para que el objeto del proceso se verifique; si ello no ocurre, surgen consecuencias que afectarán a la parte incumplida, o al juez cuando la demora se atribuya a él.

Para conjurar la inercia, desidia e inactividad de las partes en satisfacer una carga procesal o desplegar un acto de procedimiento, necesarios para proseguir la actuación que ha iniciado y de su exclusiva incumbencia, se ha previsto como remedio figuras como la actualmente denominada *desistimiento tácito*, que además ha sido prevista como mecanismo de descongestión judicial.

Dicha figura fue inicialmente establecida por Ley 1194 de 2008, modificatoria del artículo 346 Código de Procedimiento Civil, encontrándose vigente en la actualidad la contenida en el artículo 317 del Código General del Proceso, que dispone en lo pertinente:

Desistimiento tácito. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:

1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.

Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas.

El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumir las medidas cautelares previas. (...) (Subrayas y negrillas fuera del texto original)

De conformidad con el numeral 1° de la norma en cita, la carga que debe cumplirse para continuar con el trámite del proceso, debe ser ordenada por el juez para que su cumplimiento se lleve a cabo dentro de los treinta (30) días siguientes, vencido dicho término, si no se tiene la actuación de la parte que debía cumplir la carga, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación, debiendo declararlo en providencia en la que además impondrá condena en costas.

El desistimiento tácito entonces, es una forma anormal de terminación del proceso, la instancia o la actuación y ocupa ahora el lugar que antes ocupó la

perención, figura con la cual tiene similitudes, pues tiene lugar a consecuencia de la inactividad de una parte y opera sin necesidad de que la parte la solicite.

Pertinente resulta mencionar que el desistimiento tácito ha sido entendido de diversas maneras; una de ellas es que se comprenda como la interpretación de la voluntad del peticionario de desistir de su pretensión o solicitud procesal, caso en el cual su finalidad es garantizar la libertad de las personas de acceder o no a la administración de justicia y la otra, como una sanción, en la medida en que opera por el incumplimiento de una carga procesal y se instituye como una manifestación de la potestad sancionadora del juez que se impone sin necesidad de recurrir a la ficción de que el peticionario ha desistido tácitamente de su solicitud. Entendido como una sanción, el desistimiento tácito busca garantizar el derecho de todas las personas a acceder a una administración de justicia diligente, célere, eficaz y eficiente, así como el derecho a obtener pronta y cumplida justicia, siendo por tanto una medida legal que pretende disuadir a las partes procesales para evitar las prácticas dilatorias en el trámite jurisdiccional.

2. EL CASO CONCRETO

De cara a la resolución del recurso de apelación que ahora ocupa la atención del Tribunal, importante resulta tener en cuenta, como se indicó en las consideraciones que, el proceso civil es de parte, y corresponde a ellas no sólo el inicio e impulso del mismo, sino además el cumplimiento de las cargas procesales impuestas por la ley o por el funcionario judicial, dentro de los términos que corresponda; asimismo, concierne al juez cumplir lo pertinente para que el objetivo del proceso se cumpla, si ello no ocurre, surgen consecuencias que afectarán a la parte incumplida, o al juez, cuando la demora es atribuible a él.

Y una de esas obligaciones que le corresponde cumplir a la parte actora en el proceso que nos ocupa, es la de notificar a la parte demandada, trámite que se ha prolongado mucho en el tiempo, en tanto se trata de una demanda admitida hace más de once (11) años.

Con fundamento en el artículo 317 del C.G.P., el *iudex a quo*, en providencia del 8 de julio de 2022, requirió a la parte demandante para que cumpliera con el impulso del proceso, exigiéndole de manera clara las actuaciones que debía adelantar, es decir, la parte demandante tenía clara la carga que le correspondía cumplir y en dicho auto se le advirtió que el requerimiento debía cumplirse dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de esa providencia, so pena de culminar el proceso por desistimiento tácito y, fue por ello que al vencerse el término concedido por el juzgado, sin que la parte interesada cumpliera de manera completa la tarea encomendada, procedió, a dar aplicación a la figura del desistimiento tácito.

Aflora palmario para esta Magistratura que el demandante no acató debidamente la carga procesal que le correspondía dentro del plazo estipulado; pues el cómputo de treinta (30) días otorgado finalizó sin que la parte requerida diera cabal y estricto cumplimiento a la tarea impuesta, actitud procesal que conforme a lo expuesto en las consideraciones generales de esta providencia, perfectamente puede entenderse como un desinterés o desistimiento tácito de su demanda y que no puede entenderse justificada con los argumentos expuestos a través del recurso, según los cuales ruega se tenga en cuenta el esfuerzo realizado para notificar a las personas mencionadas en la actuación y que las notificaciones realizadas y aportadas cumplen los requisitos exigidos.

Es que realizado un confrontamiento entre lo requerido por el juzgado y las actuaciones realizadas por la parte demandante; se evidencia que aunque la parte actora cumplió con la orden de emplazar a los herederos indeterminados de Wbeimar Alberto Cañas Molina (Archivos 23-27, Primera Instancia) y logró que se concretara la notificación de la curadora ad litem (Archivo 12 y 13, Primera Instancia), no puede decirse lo mismo, frente al requerimiento para notificar en debida forma a las demás personas que conforman la parte pasiva, esto es: *“herederos determinados de Ana Sofía González de Cañas, Ana Sofía Cañas González, María Rosmira Cañas González, Pedro José Cañas González, Carlos Emilio Cañas González, y los fallecidos: a) Alirio de Jesús Cañas González, de quien se denunció como herederos determinados a Jorge Alirio Cañas Molina, Ana Lucía Cañas Molina,*

Beatriz Elena Cañas Molina, Mónica María Cañas Molina, Isabel Cristina Cañas Molina, Juan Carlos Cañas Molina y Weimar Alberto Cañas Molina, este último fallecido; b) María Fabiola Cañas González, de quien falta por notificar a la heredera determinada Clara Inés Cañas; c) Jesús María Cañas González, de quien se informó que sus herederos determinados eran Martha Elena Cañas Vanegas, Margarita María Cañas Vanegas, Dora María Cañas Vanegas, Luz Stella Cañas Vanegas, Alba Nubia Cañas Vanegas, Natalí Cañas Medina, Víctor Alfonso Cañas Medina y Diego Luis Cañas Medina.”

De las guías de envíos de citaciones adjuntas por el apoderado judicial de la parte demandante junto al escrito el 24 de agosto de 2022 (Archivos 14 y 15. Primera Instancia), se evidencia: (i) respecto de Ana Sofia, María Rosmira, Pedro José y Carlos Emilio Cañas González no se adjuntó constancia de citación; (ii) en cuanto a Jorge Alirio, Ana Lucia, Beatriz Elena, Mónica María, Isabel Cristina y Juan Carlos Cañas Molina se aportó constancia de envío de la notificación a una dirección diferente a la obrante en el expediente, dirección además que no existe, al igual que con Martha Elena Cañas Vanegas, frente a la cual reconoce el mismo abogado de la parte demandante que no fue posible la entrega de la citación para notificación por un error humano al diligenciar la dirección; (iii) con relación a Luz Stella, Margarita María, Dora María y Alba Nubia Cañas Vanegas los envíos fueron devueltos por no encontrar al destinatario en las oportunidades que se intentó entregar las notificaciones y, (iv) finalmente frente a Clara Inés Cañas, Natali, Víctor Alfonso y Diego Luis Cañas Vanegas se probó la remisión de la citación, pero la parte demandante no adjuntó constancia de recibido de la misma, de donde se evidencia que la parte actora no le dio cabal y estricto cumplimiento al requerimiento.

No desconoce este Despacho que la parte demandada en este proceso está integrada por muchas personas y que ello requiere un trabajo arduo de la parte actora para lograr su vinculación, pero tampoco se puede dejar de lado que, como se anteló, se trata de un proceso que lleva más de once (11) años en la etapa de notificación y que la parte actora ha sido descuidada en el trámite que le corresponde, pues sólo ha procurado notificar cuando median requerimientos de los juzgados que han conocido el proceso, no logrando efectivamente culminar con esa necesaria etapa inicial de notificaciones, a pesar de todo el

tiempo transcurrido desde la admisión y de los múltiples requerimientos que se le han realizado.

Sobre este tema pertinente resulta traer a colación lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en su Sala Civil¹ que unificó su criterio en cuanto al entendimiento que se le debe dar al artículo 317 del C.G.P., pronunciamiento y en el que luego de hacer un recuento histórico de la figura del desistimiento tácito, indica:

4.- Entonces, dado que el *desistimiento tácito*» consagrado en el artículo 317 del Código General del Proceso busca solucionar la parálisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, la «*actuación*» que conforme al literal c) de dicho precepto «*interrumpe*» los términos para se «*decrete su terminación anticipada*», es aquella que lo conduzca a «*definir la controversia*» o a poner en marcha los «*procedimientos*» necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer.

En suma, la «actuación» debe ser apta y apropiada y para «impulsar el proceso» hacia su finalidad, por lo que, «*[s]imples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derechos de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi*» carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo «*ponen en marcha*» (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020).

Ahora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que además que allí se afirma que el «*literal c*» aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jurídica. No obstante, dado que prevén hipótesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cuál es la «*actuación eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento*».

Como en el numeral 1° lo que evita la «parálisis del proceso» es que «la parte cumpla con la carga» para la cual fue requerido, solo «interrumpirá» el término aquel acto que sea «idóneo y apropiado» para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el término de treinta (30) días, solo la «*actuación*» que cumpla ese cometido podrá afectar el cómputo del término.

En el supuesto de que el expediente «*permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación (...) en primera o única instancia*», tendrá dicha connotación aquella «*actuación*» que cumpla en el «*proceso la función de impulsarlo*», teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo.

¹ Sentencia STC11191 del 9 de diciembre de 2020 expediente radicado 11001 22 03 000 2020 01444 01.

Así, el impulsor de un declarativo cuyo expediente ha estado en la «*secretaría del juzgado*» por un (1) año sin emplazar a uno de los herederos del extremo demandado, podrá afectar el conteo de la anualidad con el «*emplazamiento*» exigido para integrar el contradictorio.

Si se trata de un coercitivo con «*sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución*», la «*actuación*» que valdrá será entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las «*liquidaciones de costas y de crédito*», sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligación cobrada.

Lo dicho, claro está, sin perjuicio de lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-1194/2008), en cuanto a que el «*desistimiento tácito*» no se aplicará, cuando las partes «*por razones de fuerza mayor, están imposibilitadas para cumplir sus deberes procesales con la debida diligencia*».

En el caso concreto entonces, la actuación idónea y apropiada para el cumplimiento de la carga procesal pendiente, era notificar a todos los integrantes de la parte demandada, sin excepción, pues sólo así podría impulsarse el proceso para su continuación, pero como está claro e incluso fue reconocido parcialmente por la parte demandante, la carga no se cumplió cabalmente.

3. CONCLUSIÓN

Por lo anterior, siendo evidente para este Tribunal que la providencia que requirió a la parte demandante es clara; que también es acertado el cómputo del término y, que éste venció sin que la parte demandante cumpliera cabalmente de la carga impuesta, imperioso resultaba terminar el proceso en aplicación de la figura del desistimiento tácito, siendo entonces la decisión a adoptar en esta instancia, la de **CONFIRMAR** el auto apelado, sin lugar a condenar en costas al recurrente, en la medida en que no se causaron.

Por lo expuesto, la **suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

III. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de fecha 12 de septiembre de 2022, proferido por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medellín.

SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en esta instancia.

TERCERO. En firme este proveído **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE


MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
Magistrada

(Firma escaneada conforme al artículo 105 del C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)